



*Humala vive, a su manera, el rostro militar, rodeado de civiles, aunque en la foto brillen por su ausencia.*  
(Foto: Johnny Laurente / Andina)

# *Anteojos verdes, para verte mejor*

**EDUARDO TOCHE\***

**Militarizar:** 1. tr. Infundir la disciplina o el espíritu militar. 2. tr. Someter a la disciplina militar. 3. tr. Dar carácter u organización militar a una colectividad.

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

**L**a militarización es algo que fácilmente puede adherírsele al gobierno del presidente Humala. Son muchos los detalles que pueden hacernos ceder ante la tentación. Por ejemplo, establecer un criterio de medición sobre la base de la cantidad de militares o ex militares en el gabinete ministerial y en las altas funciones gubernamentales. Los antecedentes profesionales del Presidente, sus conductas, usos, modos e incluso —para algunos— su manera de hablar, pueden ser argumentos suficientes.

También contribuye un entorno cercano que paulatinamente empezó a mostrar un “lado verde” fuerte y consistente. Desde la campaña electoral, la importancia que adquirieron colaboradores como Adrián Villafuerte —el Ácido— fue cada vez más evidente, a pesar del hermetismo que impone como marca personal.

Otro aspecto son los escasos discursos presidenciales. Curiosamente, tal vez lo más “civil” que expresó Humala fue su mensaje a la nación, en el que se esforzó para plantear la inclusión social como eje de su gobierno. Sin embargo, sus contadas intervenciones posteriores, hasta llegar al momento culminante que significó su discurso del 8 de diciembre conmemorando la Batalla de Ayacucho, en el que expuso con nitidez rotunda su filiación militar, se fueron alejando de la marca inicial para dejar lugar a opiniones —suponemos— más cómodas en la medida que más sinceras.

Vistas las cosas de esas maneras, la militarización sería un asunto meramente formal. Con ello, el debate estaría zanjado pues no existiría materia para tal. Sin embargo, no es un estilo o manera de gobernar lo que debería ponerse sobre el tapete, sino la posibilidad de estar ante un escenario en el que la Fuerza Armada, contra lo que se establece como criterio general, acrecienta su poder corporativo hasta el extremo de adquirir autonomía de los poderes constituidos e imponer su agenda en las políticas públicas.

Sobre el punto, entonces, la militarización no es un problema que debamos achacar sin más a cuánta presencia hay de la Fuerza Armada en el gobierno sino a las debilidades institucionales que marcan la existencia de nuestra precaria democracia. De esta manera, el sello militar que podría estar mostrando el gobierno de Humala tendría un doble origen: la fuerza de un proceso de recomposición corporativa durante más de una década, no prevista por los actores políticos; y la dejadez del actual gobierno para generar los cambios que prometió durante su campaña electoral.

Viene al caso recordar el escenario de inicios de siglo, cuando se dio el proceso de recuperación democrática. Uno de los aspectos más sensibles fue precisamente la necesidad de reformar a la Fuerza Armada, considerando dos cuestiones fundamentales. Una evaluación de su desempeño durante las dos décadas previas, período en el que tuvieron que hacer frente a una importante amenaza

\* Investigador de **desco**.

subversiva contra el Estado, incorporarse a la lucha antinarcótics, enfrentar un conflicto bélico internacional focalizado con las fuerzas armadas del Ecuador y, como segundo aspecto, un análisis de los resultados que obtuvieron al decidir otorgar apoyo político al régimen autoritario que se instaló luego del autogolpe en 1992 del entonces presidente Alberto Fujimori.

Las conclusiones de estos diagnósticos no eran difíciles de suponer. Para entonces, la Fuerza Armada había “tocado fondo”, y en esa situación debía procederse a establecer los lineamientos de cambio que permitieran su inserción en la institucionalidad democrática que empezó a construirse luego del desmoronamiento del régimen fujimorista. Para el caso, se debió considerar no solo el nuevo panorama que planteaba la seguridad nacional y los ajustes imprescindibles que debía adoptar para hacerla funcional a los criterios democráticos, sino también revertir la serie de resultados negativos que habían provocado las acciones en las que se vio involucrada durante los años previos, como la alta incidencia que tuvo la corrupción entre sus mandos, la desestructuración organizativa debida a la influencia política que ejerció sobre ellas el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) bajo la conducción del asesor presidencial Vladimiro Montesinos, y las secuelas de una lucha antisubversiva que generó una alta victimización en la población civil.

Al cabo de pocos años, la evaluación de los resultados ya era desalentadora y la causa identificada entonces era la ausencia

de una decidida voluntad política en el Ejecutivo y el Legislativo para abordar una reforma a fondo del sector Defensa. Más aún, desde mediados del año 2004 los indicios conducían a afirmar que el proceso se había detenido e, incluso, empezado a mostrar claras señales de reversión. Este panorama indicó que lo diagnosticado acerca de los problemas que aquejaban a los institutos militares era cierto, pero desbordaba la simple ausencia de voluntad política por parte de las más altas autoridades del país. La reforma militar intentó llevarse a cabo mediante cambios constitucionales y legales en los roles que deben cumplir los militares y, por otro lado, potenciando al Ministerio de Defensa como el ámbito en donde debía formularse y ejecutarse la política de defensa del país. Ambas cuestiones, aunque necesarias, no fueron suficientes. ¿Por qué?

## **DAR FORMA AL ENEMIGO**

Una cuestión soslayada es que la lógica militar es la de la guerra, y sobre ella se asientan las bases de sus actitudes y comportamiento. Esto otorgó forma a su sentido profesional, no solo dando fisonomía al enemigo “externo”, el que reside fuera de las fronteras nacionales y resulta un permanente peligro, ya que también es el núcleo desde el cual componen su interacción con los principales actores políticos y sociales y, además, concibiendo las percepciones e ideas que sirven para interpretar a los contingentes civiles que proveen de tropa y futuros

oficiales. Incluso, con este eje central en la guerra conjugan el conjunto de nociones, supuestos e ideas imperantes en los diversos momentos que atraviesa el proceso seguido por sus instituciones, todos los cuales son absorbidos y reinterpretados para así inscribirse y comprender la realidad que los circunda.

Pero, sobre todo, sirve para que formen un estereotipo del enemigo “interno”, un rótulo que se asignó a grupos que tuvieron características particulares y formas de acción específicas en los diversos períodos de convulsión social a lo largo del siglo XX, pero que compartieron rasgos decisivos que finalmente se homologan ante los ojos de los militares peruanos.

Un segundo aspecto son las maneras como se fueron estableciendo las relaciones de los militares con el aparato estatal, provocando una propensión hacia su militarización, algo que no se circunscribe a los golpes de Estado y la consiguiente instalación de gobiernos bajo su conducción. Para Koonings y Kruijt,<sup>1</sup> esta situación está determinada por el denominado “principio de competencia”, es decir, la creencia de que “los militares están mejor ubicados para hacerse cargo de los intereses nacionales y, por lo tanto,

de los asuntos del Estado porque su organización y recursos se lo permiten”.

La premisa subyacente en esta suposición es “la inexistencia de una nación” en términos de sociedad civil, siendo el Estado la entidad única que asume la representación y los intereses de un abstracto “pueblo”. En ese sentido, el Estado solo puede ser confiado a la lealtad y fuerza que ofrecen sus garantes, es decir ellos mismos, pues “los civiles pueden ser cualquier cosa, desde ineficientes, pasando por fraccionados, guiados por el interés propio y corruptos, hasta desleales y antinacionales”.

De esta manera, adquirió forma la “antipolítica” militar.<sup>2</sup> En otras palabras, la certeza de que solo poniendo coto a la “política” civil, percibida como sinónimo de desorden y la primacía de intereses particulares en desmedro del bienestar de la Nación, se podía conseguir la modernización, el desarrollo económico y la estabilidad política.

Pero lejos de ser algo estática e inelástica, la concepción militar fue adecuándose a las diversas coyunturas, de las que se extrajo conclusiones alimentadas de manera importante por su propia experiencia profesional. Estos ejercicios de adecuación, por muy vigorosos que hayan sido, tuvieron límites; y gran parte de la explicación de su desenvolvimiento en las décadas de 1980 y 1990, que finalizó arrojando los saldos negativos que quedaron a la vista, radica precisamente en la pérdida de claridad respecto de lo que era un país que procesaba rápidos y

1 Kees Koonings y Dirk Kruijt, editores, *Ejércitos políticos: Las Fuerzas Armadas y la construcción de la nación en la era de la democracia*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2003

2 Véase Brian Loveman y Thomas M. Davies Jr., “The Politics of Antipolitics”. En: Brian Loveman y Thomas M. Davies Jr., editores, *The politics of antipolitics. The Military in Latin America*. Lincoln y Londres: University of Nebraska Press, 1978.



*Ni tan lejos ni tan cerca. Fujimori propició el gobierno militar con rostro civil. (Foto: Jaime Rázuri)*

profundos cambios y, como consecuencia de ello, el uso de nociones que resultaban anacrónicas y contraproducentes para el momento. En suma, como se afirmaba rotundamente en la Gran Transformación, ahora archivada, nada urgía tanto en los actuales momentos como la puesta al día de una doctrina que había devenido en obsoleta.

Por otro lado, no debemos creer que su percepción del país haya sido unívoca, pues muchos de sus componentes no guardaban coherencia entre sí. Ciertamente, a mediados del siglo XX las fuerzas armadas peruanas lograron

niveles importantes en la sistematización institucional de una doctrina, pero, aun así, fue notorio que albergaron diversas concepciones sobre lo que ellas eran y cómo debían proceder (más allá de las apariencias de subordinación ante sus mandos). En ocasiones, las tensiones provocadas por estas diferencias llegaron a poner en peligro la disciplina jerárquica.

Evidentemente, hubo un umbral ideológico y sentimental que otorgaba el consabido “espíritu de cuerpo” compartido por sus miembros, pero lo suficientemente difuso y contradictorio como para que terminara generando versiones diferentes

y hasta contrapuestas de la misma noción. Aun así, es indudable que este conjunto de ideas imprecisas fue un hilo conductor del comportamiento de sus miembros que atravesó todo el proceso histórico institucional y que, entre otros efectos, va a determinar las relaciones que mantendrán con los civiles sobre la premisa de su “superioridad” en lo que respecta a la conducción del Estado.

En este sentido, lo crucial para los militares peruanos fue definir a los miembros de la comunidad nacional y a los que estaban fuera de ella. Además, entre los últimos, no hubo homogeneidad de criterios para caracterizarlos, pues estuvieron quienes mostraron aptitudes para ser incorporados en esta comunidad nacional militarmente imaginada, y quienes no. Incluso así, la división no fue tajante, y muchos elementos no solo se intercambiaron entre ambos grupos sino que, con el transcurso del tiempo, ambas dimensiones operaron una especie de retroalimentación entre ellas.

### ¿CUÁL ES EL TRASFONDO?

Si tomamos en consideración lo dicho, la eventual militarización del gobierno de Gana Perú no estaría tanto en quien lo dice sino en los sustratos de lo que se dice. ¿Cuánto de ello responde a una manera militar de entender el país que se fue formando a lo largo de un siglo y aún define la articulación afectiva entre sus miembros? Una señal muy interesante podría ser la cantidad de veces que los voceros

gubernamentales, ex militares o civiles, usaron términos como “orden”, “disciplina” y “cohesión” para caracterizar al gabinete ministerial que se conformó en diciembre. Pero no solo eso. También está la importancia otorgada y el tratamiento que empiezan a tener algunos temas delicados, muy similares a los enfoques que dan los militares a estos.

Por ejemplo, la amnistía al presidente Fujimori y sus correlatos sobre los enjuiciamientos al personal militar que cometió violaciones a los derechos humanos. Al respecto, recordemos al ex ministro de Defensa Daniel Mora plantear una solución de “punto final” que, poco tiempo después, retomarían voceros civiles. Sumado a ello, tenemos las diversas expresiones desde el lado oficialista sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación y las maneras como el gobierno ha organizado su posición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, la definición que el gobierno ha delineado para caracterizar las protestas sociales e, incluso, el uso cada vez más frecuente de términos como “amenaza medioambiental” para referirse a una serie de acontecimientos tan complejos como la disputa en torno a la gestión de los recursos naturales y las actividades extractivas informales/ilegales. Asimismo, otra muestra es la óptica que predomina actualmente en la estrategia antidrogas, sin dejar de lado que el diferendo con Chile —en el que está pendiente el fallo del Tribunal de Justicia Internacional de La Haya— busca militarizarse a toda costa. ■